

	ACOMPañAMIENTO Y ASESORIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO
---	--

ROL PROCESO	Liderazgo estratégico y enfoque hacia la prevención Evaluación Independiente	
NOMNRE PROFESIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO	CAMILO OLIVELLA VALENCIA	FECHA 07/04/2026
CARGO O CONTRATO	CONTRATO 780-2026	
TIPO DE ACCIÓN	PARTICIPANTES	TEMA Y DESCRIPCION DE LA ASESORIA O ACOMPañAMIENTO
COMPañAMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN (08-04-2025)	<p>PERMANENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓Delegada Secretario Distrital de Gobierno ✓Subsecretaría de Gestión Institucional ✓Directora Jurídica ✓Subsecretario de Gestión Local ✓Directora Gestión de Talento Humano <p>INVITADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓Jefe Oficina Control Interno ✓Delegada Secretaría Jurídica Distrital ✓Secretaria Técnica del comité ✓Apoderado(s) Secretaría Jurídica Distrital 	<p>Teniendo en cuenta la información registrada en las Fichas SIPROJ No. 368, 1821, 1822, 1823, 1824,1825, 1826, 1827, 1828, se realiza su revisión y análisis así:</p> <p>FICHA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO: 368</p> <p>Responsable de la ficha: HENRY ALBERTO GONZALEZ MOLINA</p> <p>Numero de proceso: E- 2025-00437</p> <p>Tipo de proceso: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS</p> <p>Demandante: 1. FINO JACQUELINE 2. MORAFINO MARCELA 3. SARMIENTO FINO NAYIBE ANDREA 4. RINCÓN FINO NURY SHIRLEY 5. FINO FINO YOLANDA</p> <p>Demandado: 1. IDIGER- INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 2. SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL 3. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 4. ENTIDAD NACIONAL- ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE</p> <p>Despacho: JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ</p> <p>PROBLEMA JURÍDICO Consiste en determinar si Bogotá Distrito Capital– Secretaría Distrital de Gobierno Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, es responsable de la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público y a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles, por su omisión prolongada en la ejecución de obras de mitigación y estabilización requeridas en el sector de la calle 48B Sur, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe.</p>

PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

Que se ordene a las entidades accionadas que desarrollen y ejecuten las obras de reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento de la Calle 48 B Sur, priorizando las condiciones de seguridad, accesibilidad y tránsito para la comunidad residente y usuaria.

HECHOS:

La demanda sostiene que las autoridades, especialmente la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, omitieron durante años ejecutar obras de drenaje y estabilización recomendadas desde 2015 por el IDIGER. Esta inacción, pese a advertencias técnicas y solicitudes comunitarias, provocó el deterioro progresivo de la vía (calle 48 B Sur) y finalmente un deslizamiento que puso en riesgo a los habitantes y afectó su acceso a servicios básicos. Además, se señala incumplimiento de sus deberes en gestión del riesgo, mantenimiento vial y coordinación institucional.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:

Teniendo en cuenta que, en el caso particular, los demandantes denuncian que la situación que originó la presente acción popular persiste, no hay lugar para alegar caducidad.

PONDERACIÓN DE LA SITUACIÓN PROCESAL:

La defensa sostiene que la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe no incurrió en omisión, pues ha realizado acciones dentro de sus competencias como monitoreo, control urbanístico, coordinación interinstitucional y medidas provisionales en terreno. Argumenta que las recomendaciones del IDIGER no son obligatorias por sí mismas y dependen de viabilidad técnica, ambiental y de obligaciones previas de particulares. Señala además que existe corresponsabilidad de propietarios y habitantes, especialmente por antecedentes de actividad minera y la falta de ejecución del PMRRA, lo que limita la intervención distrital. Finalmente, afirma que hay imposibilidad jurídica y técnica para ejecutar las obras solicitadas, por tratarse de una zona de alto riesgo no mitigable y con restricciones legales vigentes.

ANTECEDENTES DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES:

Se señala que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, para que prospere una acción popular el demandante debe probar tres elementos: la existencia de una amenaza o vulneración de un derecho colectivo, que esta sea imputable al demandado y que exista relación de causalidad entre su acción u omisión y el daño.

Además, se enfatiza que es carga del actor demostrar los hechos alegados y del juez verificar que de ellos se derive efectivamente dicha afectación.

RECOMENDACIÓN:

Frente a la postura de no presentar pacto de cumplimiento no se presentan observaciones.

FICHA TECNICA DE CONCILIACIÓN: 1821

Responsable de la ficha: SANDRA JIMENA VALENCIA TORRES

Numero de proceso: E- 2026-094550

Tipo de proceso: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Demandante: 1. AGUILAR RODRIGUEZ FAVIO YECID

Demandado: 1. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2. ENTIDAD NACIONAL- FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
3. ENTIDAD PRIVADA- FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Despacho: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

PROBLEMA JURÍDICO

¿Tiene la Secretaría Distrital de Gobierno legitimación material en la causa por pasiva para conciliar el pago de la sanción moratoria por el presunto retardo en el desembolso de cesantías parciales, cuando el reconocimiento de la prestación y la decisión sobre la mora fueron adoptados exclusivamente por la Secretaría de Educación del Distrito?

PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

El solicitante pide el pago de una sanción moratoria por el retraso, equivalente a un día de salario por cada día de mora, calculando 35 días hábiles por un total de \$9.318.817, más la indexación, para una suma total aproximada de \$9.865.648.

DESCRIPCIÓN CLARA DE LOS PERJUICIOS:

Se establece, como fórmula conciliatoria, el reconocimiento y pago del cien por ciento (100%) del valor del capital en mora. De acuerdo con los datos consignados en la solicitud, esta cuantía conciliatoria se fijó en la suma neta de \$9.318.817. Para lograr este arreglo directo, la parte convocante manifiesta su disposición procesal de renunciar al cobro de la indexación, los intereses legales previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo, y las costas procesales a que hubiere lugar.

RELACIÓN CLARA DE LOS HECHOS:

El docente Favio Yecid Aguilar Rodríguez solicitó en mayo de 2024 el pago de sus cesantías parciales, las cuales fueron reconocidas en agosto y pagadas finalmente en octubre de 2024, tras su trámite ante FIDUPREVISORA. El solicitante alega una mora de 35 días hábiles en el pago y, por ello, reclamó la sanción correspondiente en octubre de 2025 ante las entidades involucradas. Sin embargo, la Secretaría de Educación negó la solicitud, argumentando fallas técnicas en su sistema y señalando que la responsabilidad del pago y de una eventual mora recaía en la fiduciaria desde el momento en que se le remitió el acto administrativo.

ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR:

Aunque la pretensión (nulidad del acto y pago de sanción moratoria) es conciliable por su naturaleza, no es viable un acuerdo en este caso porque la Secretaría Distrital de Gobierno no tiene competencia ni responsabilidad sobre el reconocimiento, trámite o pago de las cesantías docentes ni sobre la eventual mora. Dicha obligación recae en la Secretaría de Educación y la fiduciaria correspondiente, por lo que la entidad convocada carece de legitimación material para asumir el pago o participar en un acuerdo económico.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:

La eventual demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se presentó dentro del término legal de cuatro meses, ya que entre la notificación del acto (19 de noviembre de 2025) y la solicitud de conciliación (23 de febrero de 2026) transcurrieron solo tres meses y cuatro días. Además, la solicitud de conciliación suspendió el término de caducidad, por lo que la acción judicial no se encuentra caducada.

PONDERACIÓN DE LA SITUACIÓN PROCESAL:

Aunque la solicitud de conciliación cumple los requisitos formales, no es viable frente a la Secretaría Distrital de Gobierno, ya que esta carece de competencia y participación en el trámite, reconocimiento y pago de las cesantías, así como en la supuesta mora. La responsabilidad recae en la Secretaría de Educación y la fiduciaria, por lo que no existe nexo de imputación ni legitimación en la causa por pasiva. En consecuencia, se recomienda rechazar la conciliación y solicitar la desvinculación de esta entidad.

RECOMENDACIÓN:

Frente a la postura de no acoger la formula conciliatoria, no se presenta ninguna observación.

FICHA TECNICA DE CONCILIACIÓN: 1822

Responsable de la ficha: SANDRA JIMENA VALENCIA TORRES

Numero de proceso: E- 2026-122768

Tipo de proceso: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Demandante: 1. AMAYA HERRERA ANDRÉS FELIPE

Demandado: 1. SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 2. TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Despacho: PROCURADURÍA 83- JUDICIAL ADMINISTRATIVA

PROBLEMA JURÍDICO:

¿Es jurídicamente imputable a la Secretaría Distrital de Gobierno responsabilidad extracontractual por falla del servicio, con ocasión del hurto de un vehículo ocurrido el 24 de agosto de 2025 en la Zona de Parqueo Pago (ZPP) No? 1173?

PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

El convocante solicita que se declare la responsabilidad de varias entidades públicas por el hurto de su vehículo en una Zona de Parqueo Pago, alegando vulneración del principio de igualdad frente a las cargas públicas. Como consecuencia, pide una indemnización total de \$47.000.000 por perjuicios materiales (valor del vehículo y gastos asociados) y el pago de 100 SMLMV por daño moral.

DESCRIPCIÓN CLARA DE LOS PERJUICIOS:

Se establece, como fórmula conciliatoria, el reconocimiento y pago del 80% de las pretensiones propuestas. De acuerdo con los datos consignados en el formulario de presentación del trámite ante la Procuraduría General de la Nación, esta cuantía conciliatoria se fijó en la suma de \$45.000.000.

RELACIÓN CLARA DE LOS HECHOS:

El 24 de agosto de 2025, Andrés Felipe Amaya Herrera estacionó su vehículo en una Zona de Parqueo Pago en Bogotá y, tras pagar por dos horas, al regresar encontró que había sido hurtado, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad. El convocante alega que los agentes encargados omitieron sus funciones y

podieron haber evitado el robo, y añade que el vehículo era esencial para su movilidad debido a una condición médica que requiere tratamientos de diálisis.

ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR:

Aunque la reclamación por el hurto del vehículo es, en principio, conciliable por su naturaleza patrimonial, la Secretaría Distrital de Gobierno no tiene competencia sobre la administración, operación ni vigilancia de las Zonas de Parqueo Pago, funciones a cargo del sector movilidad y la Terminal de Transporte S.A. Por ello, carece de legitimación material para participar en un acuerdo indemnizatorio.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:

Al momento de presentarse la solicitud de conciliación, habían transcurrido aproximadamente seis meses y diez días desde la ocurrencia del hecho. Por consiguiente, la solicitud fue presentada dentro del término legal de dos (2) años establecido para el ejercicio del medio de control de reparación directa. De conformidad con la Ley 2220 de 2022, la presentación de la solicitud suspende el término de caducidad, el cual se reanuda una vez se expida la constancia respectiva o al vencimiento de los tres meses de suspensión sin que se haya logrado un acuerdo. En conclusión, la eventual acción judicial no se encuentra caducada.

PONDERACIÓN DE LA SITUACIÓN PROCESAL:

Aunque la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por Andrés Felipe Amaya Herrera cumple los requisitos formales, es jurídicamente improcedente imputar responsabilidad a la Secretaría Distrital de Gobierno por el hurto de su vehículo en una Zona de Parqueo Pago. La entidad no tiene competencia operativa, funcional ni presupuestal sobre la habilitación, vigilancia o custodia de las ZPP, funciones a cargo del sector movilidad y la Terminal de Transporte S.A., y su actuación se limita al registro de información. Además, el daño fue causado por un tercero ajeno a la administración y el servicio de estacionamiento no configura un contrato de custodia, por lo que no existe fundamento legal para comprometer la responsabilidad patrimonial de la Secretaría.

RECOMENDACIÓN:

Frente a la postura de no acoger la fórmula conciliatoria, no se presenta ninguna observación.

FICHA TÉCNICA DE CONCILIACIÓN: 1823

Responsable de la ficha: SANDRA JIMENA VALENCIA TORRES

Numero de proceso: E- 2025-00013

Tipo de proceso: REPARACION DIRECTA

Demandante: 1. MONSALVE VERGARAEDGARGIOVANNY
2. CONJUNTO MULTIFAMILIAR GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADAP.H.
3. JAIMES BASTIDAS JEANETH

Demandado: 1. SECRETARÍA DE GOBIERNO
2. IDIGER- INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
3. EMPRESA DEACUEDUCTOYALCANTARILLADODEBOGOTÁ
4. SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO ALC.LOCAL-LA CANDELARIA

Despacho: JUZGADO 31 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ

PROBLEMA JURÍDICO:

¿La Alcaldía Local de La Candelaria es responsable administrativa y extracontractualmente por los daños materiales ocasionados al Conjunto Multifamiliar Gonzalo Jiménez de Quesada P.H., derivados del desbordamiento de la quebrada Padre de Jesús, evento ocurrido el 29 de octubre de 2021?

PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

El demandante solicita declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía Local de La Candelaria, la EAAB, el IDIGER y la Secretaría Distrital de Hábitat por falla en el servicio debido al desbordamiento de la quebrada Padre de Jesús el 29 de octubre de 2021, reclamando indemnización por daño emergente de \$809.669.223 para cubrir reconstrucción, reparaciones, limpieza, vigilancia y restauración de instalaciones, así como el pago de costas y agencias en derecho por \$4.500.000.

RELACIÓN CLARA DE LOS HECHOS:

El 29 de octubre de 2021, fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de la quebrada Padre de Jesús en Bogotá, afectando el Conjunto Multifamiliar Gonzalo Jiménez de Quesada P.H., debido a la obstrucción del colector por falta de mantenimiento, lo que permitió la inundación de áreas sociales, parqueaderos y ascensores. Antecedentes técnicos de IDIGER

en 2009 y 2018 ya advertían sobre la erosión y la necesidad de obras de protección y drenaje. Previamente, la propiedad había solicitado intervención sobre el muro perimetral, gestionada por la Alcaldía Local de La Candelaria y remitida al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR:

El Comité de Conciliación evalúa la procedencia de conciliaciones en lo contencioso administrativo según la ley y la jurisprudencia. Aunque el caso, tramitado por el medio de reparación directa, es formalmente conciliable, la Secretaría Distrital de Gobierno (Alcaldía Local de La Candelaria) carece de legitimación material para intervenir, por lo que no es jurídicamente viable presentar un acuerdo en este asunto.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:

El medio de control de reparación directa se presentó dentro del término legal de dos años, ya que los hechos ocurrieron el 29 de octubre de 2021 y la conciliación extrajudicial se radicó el 27 de octubre de 2023. La demanda se presentó el 26 de enero de 2024, tras la audiencia de conciliación, cumpliendo así los requisitos de procedibilidad y sin que opere la caducidad de la acción.

PONDERACIÓN DE LA SITUACIÓN PROCESAL:

La defensa de la Secretaría Distrital de Gobierno, en representación de la Alcaldía Local de La Candelaria, sostiene que no tiene legitimación por pasiva al no contar con competencias sobre redes hidráulicas, quebradas o drenajes, limitándose su función a coordinar políticas y ejecutar recursos del Fondo de Desarrollo Local; además, niega la existencia de falla del servicio, ya que la atención de emergencias y mitigación de riesgos corresponde a IDIGER y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, carece de nexo causal que justifique responsabilidad solidaria y argumenta que el desbordamiento constituyó un evento de fuerza mayor, extraordinario e imprevisible, solicitando también al juez el reconocimiento de cualquier otra excepción probada durante el proceso.

ANTECEDENTES DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES:

La jurisprudencia del Consejo de Estado establece que la legitimación material requiere una conexión real y sustancial entre la parte y los hechos que originaron el daño, mientras que la legitimación de hecho solo permite intervenir procesalmente. Aplicando este criterio, la Alcaldía Local de La Candelaria solo tiene legitimación de hecho, ya que carece de competencias sobre la quebrada Padre de Jesús y la red de alcantarillado

pluvial, lo que impide atribuirle responsabilidad patrimonial en el proceso.

RECOMENDACIÓN:

Frente a la postura de no acoger la formula conciliatoria, no se presenta ninguna observación.

FICHA TECNICA DE CONCILIACIÓN:: 1824

Responsable de la ficha: KRISTIAN CAMILO SALAS DUEÑAS

Numero de proceso: E- 2025-030716

Tipo de proceso: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Demandante: 1. COLEGIO DE LOS ANDESLIMITADA

Demandado: 1. SECRETARÍA DE GOBIERNO

2. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

3. ENTIDAD NACIONAL- ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

4. ENTIDAD NACIONAL- INSPECCIÓN 9B DE POLICÍA

Despacho: PROCURADURÍA 86- JUDICIAL ADMINISTRATIVA

PROBLEMA JURÍDICO:

¿Es viable aceptar la formula conciliatoria propuesta por la parte convocante, dentro de la audiencia de conciliación extrajudicial, donde se pretende la nulidad del acto administrativo emitido el día 24 de junio de 2025, por la inspección 9B distrital de policía, a través del cual se declaró infractor al colegio de los Andes limitada?

PRETENSIONESDELADEMANDA:

Se solicita, en primer lugar, declarar la nulidad de la Resolución 1679 del 21 de octubre de 2025 de la Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá y, en segundo lugar, ordenar el pago de \$98.638.616 como restablecimiento del derecho.

RELACIÓN CLARA DE LOSHECHOS:

En la solicitud de conciliación se relatan los hechos relacionados con la querella iniciada por la Inspección 9B de Policía de Fontibón (radicado 2019594490100019E) por presunta infracción al artículo 135 literal A numeral 2 de la Ley 1801 de 2016, derivada de la licencia de construcción LC-18-4-0997. En la audiencia virtual del 24 de junio de 2025, se declaró al Colegio lo Andes Limitada, representado por Álvaro Enrique Sánchez Mojica, como infractor, se le impuso una multa de \$169.538.850 y se le ordenó demoler el área construida sobre el antejardín de 23,82 m².

Posteriormente, la Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá resolvió el recurso de apelación mediante la Resolución 1679 del 21 de octubre de 2025, modificando la multa a \$98.628.616 y confirmando el resto de la decisión de la inspección.

ANÁLISIS Y CONCEPTO PARACONCILIAR:

El Comité de Conciliación tiene la función de determinar la procedencia o improcedencia de la conciliación en cada caso, analizando la normativa vigente y la jurisprudencia aplicable, así como definir la posición institucional para las audiencias y evaluar el llamamiento en garantía. La Ley 2220 de 2022 establece que son conciliables los conflictos que pueda conocer la jurisdicción contencioso administrativa, salvo los expresamente prohibidos, y que la conciliación extrajudicial constituye requisito de procedibilidad en demandas de nulidad, restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. En el caso analizado, aunque la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho sería formalmente conciliable, no existen condiciones jurídicas materiales que justifiquen un arreglo directo.

PONDERACIÓN DE LA SITUACIÓN PROCESAL:

La solicitud de conciliación presentada por el Colegio de los Andes Limitada busca únicamente la nulidad y el restablecimiento del derecho frente a la Resolución 1679 de 21 de octubre de 2025 de la Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá, sin invocar pretensiones respecto a la decisión inicial de la Inspección 9B de Policía de la Alcaldía Local de Fontibón ni alegar causales de nulidad como falta de competencia, infracción normativa, violación del derecho de defensa, falsa motivación o desviación de poder. La actuación administrativa se ajustó a la Ley 1801 de 2016 y al procedimiento previsto, contando con sustento técnico para declarar la infracción urbanística del cerramiento del antejardín sin la respectiva licencia. Asimismo, la fórmula conciliatoria propuesta por la parte convocante por \$25.000.000 frente a la multa de \$98.628.616 no es viable, ya que la cuantificación de la sanción se encuentra objetivamente determinada por el artículo 181 de la Ley 1801 de 2016 y aplicando el principio de favorabilidad, correspondiendo mantener el valor legal de la multa.

ANTECEDENTES DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES:

La jurisprudencia reciente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, del 7 de octubre de 2021, establece que la función pública en materia de

ordenamiento del territorio se ejerce mediante actuaciones urbanísticas y decisiones administrativas de las entidades distritales y municipales. Según el Decreto 1469 de 2010, las licencias urbanísticas son autorizaciones previas y limitadas en el tiempo para construir, demoler, intervenir o urbanizar predios, y cualquier modificación no contemplada requiere una nueva licencia. Aplicando este precedente al caso, se concluyó que el convocante no contaba con autorización para el cerramiento del antejardín, lo que justificó la declaratoria de infracción urbanística.

RECOMENDACIÓN:

Frente a la postura de no acoger la formula conciliatoria, no se presenta ninguna observación.

FICHA TECNICA DE CONCILIACIÓN: 1825

Responsable de la ficha: KRISTIAN CAMILO SALAS DUEÑAS

Numero de proceso: E- 2024-00113

Tipo de proceso: EJECUTIVO CONTENCIOSO

Demandante: 1. HOYOS PEDRAZAANUARELIUTH

2. HOYOS PAJAROARNALDOSTEFAN

3. HOYOS MONTESCINDYPAOLA

4. HOYOS MONTESERICAPATRICIA

5. HOYOS PAJAROHENRRYNEGUIS

6. HOYOS PEDROZAKELLYSYADITH

7. GUERRA MARIA GERTRUDIS

8. MONTES MARTINEZ MARITZA BERNARDA

9. HOYOS PAJAROMERYESTHER

10. HOYOS PEDROZA SANDRA MILENA

11. PEDROZA GONZALEZ VISITA LEONOR

12. HOYOS PEDROZA YOSIRA ENITH

Demandado: 1. SECRETARÍA DE GOBIERNO (SOLO REPRESENTA) 2. SECRETARÍA DE GOBIERNO ALC.LOCAL-USME

Despacho: JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD SECCION TERCERA DE BOGOTÁ

PROBLEMA JURÍDICO:

Existen valores pendientes por cancelar a favor de la ejecutante Visita Leonor Pedraza Gonzales y otros, y a cargo del Distrito Capital – Secretaría de Gobierno – Alcaldía local de Usme, dentro del proceso ejecutivo 2024-00113.

PRETENSIONES DE LA DEMANDA: Se ordena librar mandamiento de pago a favor de Visita Leonor Pedroza González, Anuar Eliuth Hoyos Pedroza, Yosira Enith Hoyos Pedroza, Sandra Milena Hoyos Pedroza, Kellys Yadith Hoyos Pedroza, Arnaldo Estefan Hoyos Pájaro, Mery Esther Hoyos Pájaro, Henry Neguis Hoyos Pájaro, Maritza Bernarda Montes Martínez, Erica Patricia Hoyos Montes, Cindy Paola Hoyos Montes y María Gertrudis Guerra, y en contra del Distrito Capital – Secretaría de Gobierno – Alcaldía Local de Usme, por un saldo capital de \$36.245.080, más intereses moratorios a la tasa comercial desde el 23 de julio de 2021 hasta la fecha de pago total.

RELACIÓN CLARA DE LOS HECHOS:

En el proceso judicial radicado 11001-3336-038-2014-00231-00, la Alcaldía Local de Usme, Codensa S.A. y Leyla Ortiz Cardona fueron declaradas patrimonial y solidariamente responsables por la muerte de Fray Luis Hoyos Montes, Yadira Luz Hoyos Pedroza y Olga Edith Hoyos Pedroza ocurrida el 7 de enero de 2012. Se condenó a la Alcaldía Local de Usme al pago de 187,5 SMMLV, sentencia que quedó ejecutoriada el 28 de octubre de 2020. La reclamación se presentó el 31 de marzo de 2021 y mediante Resolución No. 56 del 29 de abril de 2021 se reconoció el pago de \$170.348.625, aplicándose un descuento de \$36.420.536, quedando un neto pagado de \$133.928.089 el 22 de julio de 2021.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:

Dado que las condenas judiciales quedaron ejecutoriadas el día 28 de octubre de 2020, y la demanda fue presentada el día 25 de abril de 2024, no operó el fenómeno de la caducidad.

PONDERACIÓN DE LA SITUACIÓN PROCESAL:

En el proceso derivado de la sentencia por la muerte de Fray Luis Hoyos Montes, Yadira Luz Hoyos Pedroza y Olga Edith Hoyos Pedroza, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró patrimonialmente responsables a Codensa S.A., la Alcaldía Local de Usme y Leyla Ortiz Cardona, asignando a la Alcaldía la obligación de pagar 187,5 SMMLV, ejecutoriada el 28 de octubre de 2020; tras la reclamación del 31 de marzo de 2021, se efectuó un pago de \$133.928.089 el 22 de julio de 2021, aplicando los descuentos tributarios correspondientes conforme a la doctrina de la DIAN, y considerando que las indemnizaciones por daño moral están gravadas salvo expresas excepciones; dado que este pago

cubrió la obligación total incluyendo intereses, no existen saldos pendientes a favor de los beneficiarios, por lo que no resulta jurídicamente viable conciliar ni presentar fórmula conciliatoria.

RECOMENDACIÓN: Frente a la postura de no acoger la formula conciliatoria, no se presenta ninguna observación.

FICHA TECNICA DE CONCILIACIÓN: 1826

Responsable de la ficha: KRISTIAN CAMILO SALAS DUEÑAS

Numero de proceso: E- 2026-080423

Tipo de proceso: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Demandante: 1. HERNANDEZ PARRALUISA XIMENA

2. RAMÍREZ HERNÁNDEZ ANA GABRIELA

3. RAMÍREZ GUERRERO JOSÉANTONIO

4. PARRA DEHERNÁNDEZLUISAEMMA

5. HERNÁNDEZ CADENAMIGUELANGEL

Demandado: 1. SECRETARÍA DE GOBIERNO (SOLO REPRESENTA) 2. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

3. SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

4. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

5. ENTIDAD PRIVADA- ENEL COLOMBIAS.A. E.S.P.

6. SECRETARÍA DE GOBIERNO ALC.LOCAL-TEUSAQUILLO

Despacho: PROCURADURÍA 138- JUDICIAL ADMINISTRATIVA

PROBLEMA JURÍDICO:

¿Es jurídicamente responsable la Alcaldía Mayor de Bogotá-
¿Secretaría Distrital de Gobierno–Alcaldía Local de Teusaquillo,
¿por el presunto accidente ocurrido el día 17 de febrero de 2024,
que desencadenó en las lesiones, y el presunto daño moral hacia
la señora Luisa Hernández y su núcleo familiar?

PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

Se solicita que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) – Alcaldía Mayor de Bogotá (Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) – Alcaldía Local de Teusaquillo – Enel Colombia S.A. E.S.P. (Enel) sea declarado administrativamente responsable por los daños antijurídicos y lesiones a la salud sufridos por Luisa Ximena Hernández Parra el 17 de febrero de

2024, atribuibles al deterioro de la malla vial y a la falta de alumbrado público en la vía de la ciudad de Bogotá.

DESCRIPCIÓN CLARA DE LOS PERJUICIOS:

Que se condene a las entidades demandadas apagar por concepto de Perjuicios Morales, la suma de \$462.238.920, y por concepto Daño a la Salud la suma de \$112.057.920, con la correspondiente liquidación de intereses atendiendo lo preceptuado en la Ley 1437 de 2011.

RELACIÓN CLARA DE LOS HECHOS:

El 17 de febrero de 2024, Luisa Ximena Hernández Parra cayó en un hueco del pavimento al regresar al carro donde estaban sus hijos, debido a la falta de alumbrado público, sufriendo un esguince en el pie derecho y fractura del peroné izquierdo. Fue atendida inicialmente en Ostrauma Vida en Armonía con inmovilización ortopédica y seguimiento por ortopedia, siendo remitida a la Fundación Santa Fe de Bogotá. El 27 de febrero de 2025, una resonancia reveló rotura ligamentaria del tobillo, y el 6 de mayo de 2025 se le practicó cirugía de reconstrucción ligamentaria en Clínica Marly, ordenándose 180 días de incapacidad y terapias. Finalmente, el 9 de octubre de 2025, la Junta Regional de Calificación de Invalidez determinó una pérdida de capacidad laboral del 19,03% por las lesiones sufridas.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:

De acuerdo con el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá interponerse dentro del término de dos (2) años contados a partir del día siguiente al del hecho dañoso, según el caso.

La solicitud de conciliación se presentó el 17 de febrero de 2026, por lo que se encuentra dentro del término, y suspende el conteo del término de caducidad hasta la finalización del trámite conciliatorio.

PONDERACIÓN DE LA SITUACIÓN PROCESAL:

La solicitud de conciliación busca imputar responsabilidad a la Alcaldía Local de Teusaquillo por el accidente sufrido por Luisa Ximena Hernández Parra el 17 de febrero de 2024, argumentando omisión en el mantenimiento vial y falta de alumbrado público. Sin

embargo, no se evidencia una falla concreta atribuible a la Alcaldía, ni se aportan pruebas del tiempo, lugar o modo del accidente, ni dictamen pericial que establezca el nexo causal. Además, el alumbrado público es competencia de ENEL, por lo que la Alcaldía Local no puede ser considerada responsable. La jurisprudencia respalda que la sola existencia de un defecto en la vía no genera responsabilidad automática del Estado.

RECOMENDACIÓN: Frente a la postura de no acoger la fórmula conciliatoria, no se presenta ninguna observación.

FICHA TÉCNICA DE CONCILIACIÓN: 1827

Responsable de la ficha: RAFAEL ALFONSO RIVERA ROBLES

Numero de proceso: E- 2026-00224

Tipo de proceso: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

Demandante: 1. VALLEJO MOLINA NUBIA MARGOTH

Demandado: 1. SECRETARÍA DE GOBIERNO (SOLO REPRESENTA) 2. SECRETARÍA DE GOBIERNO FDL-ENGATIVÁ

Despacho: JUZGADO 52- ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA

PROBLEMA JURÍDICO:

Establecer si el acto administrativo distinguido con el radicado 20256020318601 del 2 de mayo de 2025, expedido por la Alcaldía Local de Engativá, adolece de alguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo 137 del CPACA, en virtud a la existencia de una presunta relación laboral entre la Entidad demandada y la señora Nubia Margoth Vallejo Molina.

PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

La solicitud de conciliación extrajudicial busca que se declare la nulidad del oficio N° 20256020318601 de la Alcaldía Local de Engativá, reconociendo que entre la señora Nubia Margoth Vallejo Molina y la Secretaría de Gobierno Distrital-Alcaldía Local de Engativá existió una relación laboral subordinada desde el 10 de marzo de 2017 hasta el 10 de septiembre de 2024, con reconocimiento de sus funciones, salario y derechos laborales, incluyendo cesantías, primas, recargos, indemnizaciones y devolución de aportes a seguridad social, así como la continuidad de la relación laboral con efectos de restablecimiento de derecho,

		<p>y se ordene el pago de todas las sumas correspondientes con indexación, intereses corrientes y moratorios, libre de impuestos.</p> <p>DESCRIPCIÓN CLARA DE LOS PERJUICIOS:</p> <p>El convocante estima los perjuicios por concepto de daño emergente consolidado en la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$84.301.330)</p> <p>RELACIÓN CLARA DE LOS HECHOS:</p> <p>La solicitud de conciliación expone que la señora Nubia Margoth Vallejo Molina celebró contratos de prestación de servicios con la Alcaldía Local de Engativá entre el 10 de marzo de 2017 y el 10 de septiembre de 2024, desempeñándose de manera subordinada y permanente como Técnico Operativo en la Coordinación Administrativa y Financiera (hoy Gestión de Desarrollo Local), cumpliendo funciones misionales, utilizando los implementos y sistemas de la entidad, con jornada fija y bajo supervisión directa de los alcaldes y coordinadores. Señala que, por las condiciones de subordinación, permanencia y desempeño de funciones propias del cargo de planta, se configuró una desnaturalización de los contratos de servicios, constituyendo un verdadero contrato laboral. En consecuencia, radicó derecho de petición el 9 de abril de 2025 solicitando reconocimiento de la relación laboral y pago de derechos laborales, solicitud que fue negada por la Alcaldía el 18 de junio de 2025 mediante el radicado No. 20256020217601.</p> <p>CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:</p> <p>En el presente caso, la jurisprudencia del Consejo de Estado establece que la prescripción para reclamar derechos derivados del llamado “contrato realidad” es de tres años contados desde la terminación de cada contrato, salvo los aportes pensionales, que son imprescriptibles. Aplicando este criterio, los contratos de prestación de servicios celebrados por Nubia Margoth Vallejo Molina con la Alcaldía Local de Engativá entre 2017 y 2022 se encuentran prescritos para efectos de reclamar prestaciones salariales y sociales, por lo que solo son objeto de análisis los contratos suscritos entre 2022 y 2024 (No. 176-2022, 294-2023 y 438-2024), cuyos periodos de ejecución abarcan del 2 de enero de 2022 al 10 de septiembre de 2024, mientras que los aportes al</p>
--	--	---

sistema de pensiones continúan siendo exigibles en cualquier momento.

PONDERACIÓN DE LA SITUACIÓN PROCESAL:

La defensa sostiene la inexistencia del contrato laboral argumentando que el vínculo con la demandante fue de naturaleza estatal (prestación de servicios), donde la supuesta subordinación alegada es, en realidad, una relación de coordinación y supervisión legalmente obligatoria (Ley 1474 de 2011). Se enfatiza que el cumplimiento de horarios, la presentación de informes y el uso de instalaciones respondieron a la necesidad de ejecutar el objeto contractual de manera eficiente y no a una potestad disciplinaria, sumado a que la demandante aceptó voluntariamente estas condiciones bajo el principio de autonomía de la voluntad y que las interrupciones temporales entre contratos (superiores a dos meses) desvirtúan el requisito de continuidad necesario para declarar un contrato realidad.

RECOMENDACIÓN: Frente a la postura de no acoger la fórmula conciliatoria, no se presenta ninguna observación.

FICHA TÉCNICA DE CONCILIACIÓN: 1828

Responsable de la ficha: RAFAEL ALFONSO RIVERA ROBLES

Numero de proceso: E- 2026-016147

Tipo de proceso: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Demandante: 1. HUERTAS CASTRO GILBERTO

2. CASTILLO DIEGO ARMANDO

3. CARDONA TOLEDO JACSON STYVEN

4. CALVO RAMÍREZ JAIME ANTONIO

5. PÉREZ ÁVILA JORGE ARMANDO

6. JIMÉNEZ NARANJO JOSÉ GEOVANNY

7. CASTILLO DÍAZ LUZ MARIELA

8. MARTÍNEZ ROA NELCI VIVIANA

9. MOSQUERA LOPEZ SHIRLEY

10. ESTRADA HURTADO WILMAR ISRAEL

11. ORTIZ SÁNCHEZ WILSON

Demandado: 1. PERSONERÍA DE BOGOTÁ

2. SECRETARÍA DE GOBIERNO (SOLO REPRESENTA)

Despacho: PROCURADURÍA 3- JUDICIAL ADMINISTRATIVA

PROBLEMA JURÍDICO:

Establecer si la Alcaldía Local de Santafé, ha incurrido en algún tipo de acción u omisión que haya generado un daño antijurídico a los convocantes, en atención a la diligencia de entrega de bien inmueble ubicado en la Avenida Caracas No.13-08, piso segundo, identificado comercialmente como CENTRO COMERCIAL SHADDAL, realizada el día 15 de enero de 2024, en cumplimiento al despacho comisorio ordenado por el Juez 8 de Paz.

PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

La solicitud de conciliación reclama que la Nación, la Rama Judicial, la Alcaldía Local de Santa Fe, la Policía Nacional, la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sean declaradas responsables administrativa y patrimonialmente por los daños causados a la señora Shirley Mosquera López y a nueve arrendatarios y comerciantes de buena fe, debido a desalojos derivados de actuaciones irregulares y descoordinadas de las autoridades. Se solicita el pago de daño moral de 100 salarios mínimos mensuales por cada afectado, y el reconocimiento de daño material y lucro cesante por los perjuicios patrimoniales ocasionados en cada negocio, incluyendo pérdidas de propiedad, inventarios, inversión en el negocio y utilidades dejadas de percibir, con montos que oscilan desde los 21 millones hasta más de 341 millones de pesos según cada establecimiento, sumando tanto el daño emergente como el lucro cesante de cada afectado.

DESCRIPCIÓN CLARA DE LOS PERJUICIOS:

El convocante estima los perjuicios en la suma de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$1.884.762.699)

RELACIÓN CLARA DE LOS HECHOS:

La solicitud de conciliación expone que la señora Shirley Mosquera López, como arrendadora y administradora del Centro Comercial Shaddai, y sus arrendatarios, operaban negocios legales y rentables con contratos válidos y matrícula mercantil vigente. A pesar de la existencia de medidas cautelares y nulidades decretadas por autoridades judiciales, la Alcaldía Local de Santa Fe, con apoyo de la Policía y sin respetar decisiones previas, ejecutó desalojos materiales el 21 de diciembre de 2023 y el 15 de enero de 2024, afectando a los arrendatarios que no

eran parte del proceso, lo que produjo la pérdida total del uso, goce y explotación económica del inmueble y consolidó un daño antijurídico imputable al Estado.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN: El medio de control de reparación directa tiene un término de caducidad de cuatro (2) años, conforme a lo establecido en el Artículo 140 del CPACA, para este caso, el presunto daño antijurídico sufrido por la parte convocante, ocurrió el día 15 de enero de 2024 y la solicitud de conciliación fue radicada en la Procuraduría General de la Nación, el día 16 de enero de 2026, lo que nos permite concluir que no ha operado la caducidad del medio de control.

PONDERACIÓN DE LA SITUACIÓN PROCESAL:

La Alcaldía Local de Santafé actuó conforme a la orden judicial emitida por el Juzgado 8° de Paz de Bogotá para la entrega y restitución del inmueble ubicado en la Avenida Caracas No. 13-08, cumpliendo con sus competencias legales y garantizando el debido proceso de los intervinientes. No le corresponde verificar títulos, estudiar el fondo del proceso ni asumir responsabilidad por eventuales afectaciones económicas. Por tanto, la pretensión de reparación directa de la parte convocante no prospera, al no acreditarse el nexo de causalidad ni existir legitimación en la causa por pasiva frente a la Alcaldía.

Al respecto de los hechos presentados por la demandante, se observa decreto de suspensión y nulidad del 12 de enero por parte del Juzgado 10 y 18 de reconsideración. Sobre el cual, el Juzgado 08 de Paz de la ciudad de Bogotá manifestó desconocer la competencia del juez de reconsideración para dirimir la controversia, teniendo en cuenta que el recurso debió ser interpuesto ante dicho despacho y no ante el cuerpo colegiado. Es de anotar que una vez le fue notificada a la convocante la sentencia proferida por el Juzgado Octavo de Paz de Bogotá, pudo interponer ante ese despacho recurso de reconsideración, cuyo conocimiento debía corresponderle a un cuerpo colegiado, integrado por al menos dos jueces de reconsideración, conforme lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 497 de 1999. Posteriormente el día 15 de enero del año 2024, el Juzgado 08 de Paz de Bogotá libró nuevamente despacho comisorio, reiterando la entrega y restitución del inmueble, mediante oficio No. 0234, señalando lo siguiente: "PRIMERO: REITERAR LIBRARSE EL CORRESPONDIENTE DESPACHO COMISORIO, para diligencia de ENTREGA, RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE identificado con MATRICULA INMOBILIARIA No 50C-1418949,

 SECRETARÍA DE GOBIERNO	ACOMPañAMIENTO Y ASESORIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO
---	--

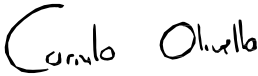

		<p>Local 1 y 2.. NO SE INTERPUSO RECONSIDERACIÓN ANTE EL JUEZ DE PAZ Nro. 8.</p> <p>RECOMENDACIÓN:</p> <p>Frente a la postura de no acoger la formula conciliatoria, no se presenta ninguna observación.</p>
--	--	---

EVIDENCIAS

Fichas SIPROJ No. 368, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828.

COMPROMISOS:

Ninguno

<p>ELABORÓ</p> <p>CAMILO ANDRES OLIVELLA VALENCIA OCI</p>  <p>REVISÓ</p>  <p>Firmado por OLGA MILENA CORZO ESTEPA el 07/04/2026 a las 15:21:51 COT</p> <p>OLGA MILENA CORZO ESPITIA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)</p>	<p>PARTICIPANTE (Si aplica)</p> <p>No aplica</p>
--	---